

La corrupción acorrala al Gobierno de España

20 de julio de 2013. **El Tiempo.com.** http://www.eltiempo.com/mundo/europa/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12940482.html

- **Mariano Rajoy está en entredicho por las revelaciones del extesorero del Partido Popular.**

Desde una celda de 10 metros cuadrados, en la cárcel de Soto del Real, un preso de postín define la agenda política de España. Luis Bárcenas, responsable de las cuentas del Partido Popular (PP) durante 28 años e inquilino del presidio madrileño desde el 27 de junio, amenaza con desestabilizar al Gobierno con revelaciones sobre la financiación ilegal de la formación conservadora mediante aportes de empresarios, sobre todo contratistas de la construcción, y el pago de sobresueldos a su cúpula, incluido el presidente Mariano Rajoy.

El extesorero, de 56 años, sobre quien el propio mandatario dijo que no se podrá demostrar su culpabilidad, pasó de negar la existencia de una contabilidad paralela, entre 1990 y el 2008, a entregar el lunes, a un juez de la Audiencia Nacional, el detalle de las entradas de dinero en negro (por debajo de la mesa), que asciende a 8,3 millones de euros, según revelaron El País y El Mundo. El principal beneficiario: el asesor electoral del Presidente, Pedro Arriola, con cerca de 1,5 millones. Y el segundo, su jefe, Rajoy, con casi 350.000 (comenzó a cobrar en 1997).

El trasiego de dinero rondaba los 600.000 euros anuales. Los fondos, ilegales, se entregaban presumiblemente en efectivo, cada mes, en sobres marrones, bolsas, maletas o maletines. Los dirigentes redondeaban así sus salarios.

El partido, que ha monopolizado la centroderecha española los últimos 20 años, burlaba la normativa electoral fraccionando las aportaciones para no superar el límite legal de 60.000 euros anuales por donante. Y los contribuyentes, 23, se beneficiaban con contratos, que, en virtud de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, llegaron a sumar más de 12.300 millones de euros.

Bárcenas, quien permanece tras las rejas después de descubrirse que amasó una fortuna ilícita de 48,2 millones de euros, repartidos en varias cuentas en Suiza, desgranó en cinco horas de declaración, la décima en sede judicial, los movimientos opacos que él, con su puño y letra, registró en hojas sueltas.

El extesorero presentó resguardos contables, recibos, fotocopias de cheques, una memoria USB repleta... Documentación inédita y comprometedor que, pese a algunas contradicciones, pone a Rajoy contra las cuerdas. Aunque la financiación ilegal no es

delito en España, las consecuencias políticas de este dardo envenenado son impredecibles. Los bancos de inversión, como el alemán Deutsche Bank o el británico HSBC, alertan sobre la tormenta que puede desestabilizar al Gobierno y la pérdida de legitimidad para acometer las reformas pendientes.

Rajoy calla

El Presidente ha decidido acogerse a un voto de silencio. Se niega a comparecer en el Parlamento y no abraza la posibilidad de dimitir. "Voy a cumplir con mi mandato (...) El Estado de derecho no se somete a chantaje", se limitó a declarar en rueda de prensa.

La revelación del intercambio de SMS entre Rajoy y Bárcenas hasta marzo pasado, incluso después de estallar el escándalo, forzó el domingo pasado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a amenazar con una moción de censura que, sin embargo, no prosperaría por no contar con votos suficientes (el PP tiene una mayoría absoluta de 187 diputados).

"El Presidente no debía contestar a informaciones periodísticas, pero desde el momento en que el extesorero ratificó sus declaraciones ante el juez había motivos suficientes para que solicitase su comparecencia en el Congreso y diese una explicación adicional, aunque sea reiterativa, a las acusaciones", sostiene el analista José Antonio Zarzalejos. ¿Abandonar el cargo? "Es posible, pero poco probable. Que resulte verosímil para la opinión pública que haya cobrado no se traduce en una certeza judicial. Hasta que se pruebe la acusación, vale más la palabra de un presidente que la de un presunto delincuente", asevera el exdirector del diario ABC.

En este país no predomina la cultura de la dimisión. Hay, en la óptica de César Molinas, promotor del manifiesto 'Por una nueva Ley de Partidos', "una confusión interesada entre culpabilidad y responsabilidad: se dimite si hay condena, pero hasta que llegue ese momento pueden pasar 15 años". La carencia de medios humanos y materiales en los juzgados, las unidades policiales especializadas y la Agencia Tributaria dilata la tramitación de decenas de causas.

Carles Casajuana, director del Departamento de Política Internacional y Seguridad del Gabinete en la presidencia de Rodríguez Zapatero, señala que "el sistema necesita mecanismos para depurarse. Uno de los problemas que tiene el edificio constitucional es que las fórmulas de corrección de los problemas de corrupción no son suficientemente ágiles, no solo en la justicia sino en el interior de los partidos".

Pero no puede decirse que la corrupción en España es sistémica. "Aun cuando el foco del mal anida en el estamento político, los sobornos a funcionarios en ningún caso son moneda corriente", afirma Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y

Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y autor de numerosos informes sobre el tema.

El experto aporta cifras al fenómeno, que incluso ha salpicado a la familia real: cerca de mil políticos se encuentran imputados por prevaricato, cohecho, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos en 600 municipios. "Son, sobre todo, casos vinculados al sector inmobiliario y a grandes contrataciones públicas", anota. El ejemplo más flagrante: Murcia. En esta región, de apenas 45 localidades, constan 40 procesos abiertos por corrupción.

"A la política ha llegado gente desapegada de la realidad e incompetente, que no busca servir a la ciudadanía, sino servirse de la ciudadanía y vivir a costa del ciudadano", apostilla José María Gay de Liébana, economista y profesor de la Universidad de Barcelona.

Bárceñas, Gúrtel, Malaya, Guateque, Pokemon, Nóos, Palau, Mercasevilla, Clotilde, Ere, Fabra... Los casos se solapan unos con otros. De los 2.173 procedimientos de especial complejidad que en la actualidad se instruyen en 798 tribunales españoles, 1.661 (las tres cuartas partes) corresponden a delitos de corrupción política y económica (302 son considerados macroprocesos por los tipos delictivos, el número de implicados y la dificultad de la investigación), según datos del Consejo General del Poder Judicial.

La indignación social se refleja en los sondeos. Y todos coinciden. El mes pasado, en el último barómetro del Real Instituto Elcano, cuatro de cada diez ciudadanos opinaban que el problema internacional más importante para España y para su imagen en el exterior era la corrupción política, seguido, y de lejos, por el desempleo (18,8%). En la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 60 por ciento de los entrevistados respondió que es bastante frecuente defraudar al fisco o a la Seguridad Social y reconoció un aumento en la práctica de este tipo de comportamientos en los últimos cinco años.

Aunque lo cierto es que, según un estudio de Metroscopia, en casi la totalidad de los ciudadanos, el 96 por ciento, predomina la sensación de que la corrupción se manifiesta más en la esfera política. José Pablo Ferrándiz, analista de esta firma, apunta que "los encuestados no creen que hay más casos de corrupción que en épocas pasadas, sino que se lucha mejor y por eso salen a la luz".

Escenarios como el actual, de una debacle económica, influyen también, desde su punto de vista, en el crecimiento de la preocupación por este asunto. Ocurrió a mediados de los 90: "La crisis no alcanzó la magnitud de la de ahora, pero la corrupción y los partidos aparecían entre los tres principales problemas en los sondeos", dice.

La última oleada de Metroscopia sobre el clima social evidenció además un deterioro de la imagen del Gobierno, presumiblemente "porque en las evaluaciones de los entrevistados pesan los escándalos en el entorno del PP", asegura Ferrándiz. El 82 por

ciento de los españoles consideran que la formación es responsable de lo ocurrido, sabía lo que pasaba y no hizo nada para impedirlo. Más de un millar de personas protestaron el jueves a las afueras de la sede del PP al grito de "no hay pan para tanto chorizo". Por su parte, el magistrado Pablo Ruz pidió a la Fiscalía que le informe si debe llamar a declarar al jefe del Ejecutivo y si quienes cobraron sobresueldos cometieron delitos fiscales.

Pero los escándalos no se traducen en menos votos. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España, advierte que en los últimos comicios 7 de cada 10 candidatos imputados resultaron electos. "Esto podría cambiar, aunque la pérdida de

punto y medio en la intención de voto por el PP registrada en el último mes está más vinculada a la crisis económica y a la incapacidad del Ejecutivo", tercia Ferrándiz.

Mientras tanto, diversas plataformas abogan por la aprobación de una nueva Ley de Partidos porque, como denuncia César Molinas, "están más reguladas las comunidades de vecinos o los equipos de fútbol que las formaciones políticas", así como por una Ley de Transparencia que "cree unas condiciones necesarias de suministro de información de los organismos que reciben o deciden sobre dinero público".

Albert Rivera, presidente del partido Ciudadanos (de Cataluña), considera que España "asiste al fin de una etapa y a un debate ético sobre los valores que deben primar en política: si es una profesión, un negocio o una trama delictiva".

Es tal el malestar que dos informáticos han querido canalizar la indignación con una aplicación para iPhone, llamada Pregunticas, que en la semana de su lanzamiento, a principios de junio, se convirtió en la tercera más descargada en App Store. Se trata de un gran cuestionario interactivo, que incluye una categoría con 500 cuestiones sobre la corrupción en España. Y cada día se añaden hasta 20 preguntas. Xavier Vinaixa, uno de sus creadores, da por hecho que entre los 35.000 usuarios registrados hay algún político: "Juegan, seguro, para ver si se encuentran".

Patricia Villarruel Gordillo